

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (pp. 2-9)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT VALENCIANA (pp. 10-16)

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada
doctora de Dret Administratiu*

Universitat Jaume I

Sumario: 1. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA): STSJCV 4569/2012, de 20 de julio, 4572/2012, de 23 de julio, 4573/2012, de 23 de julio, 4575/2012, 23 de julio. 2. Responsabilidad patrimonial: STSJCV 3039/2012, 14 de junio de 2012, y STSJCV 3035/2012, de 6 de mayo. 3. Canon de Control de Vertidos: Sentencia del TSJCV 3581/2012, de 5 de junio. 4. Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN): STSJCV 4346/2012, de 29 de junio. 5. Antenas de telefonía móvil. 5.1. Licencias ambientales: STJCV 4342/2012, de 29 de junio. 5.2. Ordenanzas de antenas: STSJCV 3628/2012, de 4 de mayo. 6. Homologación del Plan General: STSJCV 2257/2012, de 26 de abril.

1. Zonas de especial protección para las aves (ZEPA): STSJCV 4569/2012, de 20 de julio, 4572/2012, de 23 de julio, 4573/2012, de 23 de julio, 4575/2012, 23 de julio

Comenzaremos señalando que han sido varias las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (en adelante, TSJCV) dictadas a raíz de la ampliación de una red ZEPA en la Comunidad Valenciana, entendida esta como una figura de protección para las 175 especies de aves consideradas más amenazadas en Europa, y especialmente para las aves migratorias. En el ámbito valenciano es clave, al respecto, el Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana, que supuso un incremento sustancial de la superficie total de ZEPA, pues se añadieron a la red 25 ZEPA más, con un total, así, de 43 ZEPA. Dicho Acuerdo ha sido objeto de múltiples recursos que el Tribunal Superior analiza en estas sentencias.

Debe adelantarse que el Reino de España y, entre otras, la Comunidad Valenciana fueron precisamente objeto de condena por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia de 28 de junio del 2007 (asunto C-235/04) ante la insuficiencia de espacios protegidos en el territorio español, en aplicación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres¹, sentencia que dio origen a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, siendo esta una de las jurisprudencias citadas por el TSJCV en sus pronunciamientos.

Se plantean diversos aspectos en cada una de las demandas interpuestas, pero pueden extraerse algunos puntos en común.

En primer lugar, cabe recordar que la finalidad de la Directiva de Aves 79/409/CEE (hoy derogada por la llamada Directiva de Hábitats 2009/147/CEE) *es la protección*,

¹ En su versión modificada; en particular, por la Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997. La Directiva está hoy derogada por la llamada Directiva de Hábitats 2009/147/CEE; completada con la Directiva de Hábitats 92/43/CEE.

preservación, el mantenimiento o el restablecimiento de una diversidad y de una superficie suficiente de hábitats que son indispensables para la conservación de todas las especies de aves, y ello comporta la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas necesarias para la conservación de dichas especies, obligación que, dada la configuración del Estado español como un Estado de las autonomías, requiere una importante labor de las comunidades autónomas con competencias sobre la materia.

Por otro lado, uno de los puntos controvertidos es el relativo al valor de los informes IBA (área importante para las aves). El TSJ de la Comunidad Valenciana reflexiona sobre la naturaleza de estos, a los que se les dedica especial atención. Es necesario considerar que la problemática surge por el carácter no vinculante de estos informes IBA; no obstante, entiende el TSJ —a la luz de la jurisprudencia europea— que ello no es obstáculo para otorgarles un papel determinante y una utilidad inestimable, pues los informes IBA identifican las zonas ZEPA y, para ello, utilizan criterios ornitológicos y biológicos. En este sentido, señala el Alto Tribunal Europeo, los informes IBA se consideran, por su valor científico reconocido, como base de referencia para la clasificación de los territorios como ZEPA, salvo aportación de prueba científica que desvirtúe la calificación del IBA (entre otras, la STJUE de 19 mayo de 1998, la de 20 marzo de 2003 y la de 25 octubre de 2007).

Otro de los puntos objeto de discusión —en las SSTSJ Comunidad Valenciana 4574/2012, de 23 de julio, y 4575/2012, 23 de julio— se refiere al procedimiento de declaración de la ZEPA y, en concreto, al trascendental asunto de la participación de los interesados a través del trámite de audiencia, cuestiones abordadas también en el ámbito nacional por el TS. Sin embargo, el TS, en la interpretación que hace en su jurisprudencia, adopta posiciones —siguiendo al TSJCV— a nuestro entender restrictivas por cuanto considera que la declaración de ZEPA es una decisión en la que la Administración no tiene ningún margen de decisión, razón por la cual, argumenta, es innecesaria la audiencia. Entendemos que en esta sentencia se producen contradicciones dado que se considera oportuna la no audiencia al referirse a la posibilidad del interesado de realizar alegaciones y a la práctica de la prueba. Sin embargo, entendemos que se trata de formas de participación no tan perfectas como el trámite de “audiencia”, el cual, si bien no es obligatorio en todos los supuestos, sí debería al menos fomentarse tanto por la Administración como por los tribunales. Los supuestos objeto de discusión se encuadrarían en el caso de que una zona declarada parcialmente como IBA se

ampliara e incluyera en una zona ZEPA, realidad que a juicio del TSJ requiere únicamente de motivación, pero nada dice sobre la participación.

Con todo, deben resaltarse las conclusiones a las que llega el Tribunal, en las que claramente se opta por una amplia preservación del medio ambiente, como se pone de manifiesto al primar los aspectos ambientales por encima de otros intereses como los económicos. En este sentido, las sentencias examinadas dicen lo siguiente: “Ya hemos visto, según las sentencias del TJCE, que los criterios para la clasificación de ZEPAS no son sino los ornitológicos, sin que sea posible en la determinación de su delimitación la concurrencia de otras exigencias, como por ejemplo las de carácter económico”. Por otro lado, se otorga a los informes IBA, si bien no un carácter vinculante, sí una presunción de veracidad *iuris tantum* que supone un desplazamiento de la carga de la prueba a aquellos que se opongan a dicha calificación. Sobre la base de estos razonamientos, el TSJCV rechaza la mayoría de recursos presentados.

En otro de los pronunciamientos, sin embargo —STSJCV 4573/2012—, el Tribunal estima el recurso, ya que como alega la parte recurrente no se han considerado como ZEPA las superficies integradas en el IBA. En este sentido, dice el TSJCV que “la administración se ha separado del criterio de delimitación de las IBA y lo ha hecho, sin que en el Decreto que se recurre, haya determinado las razones de esa disconformidad, de manera que el acto en este sentido está inmotivado y procederá decretar su anulación”

2. Responsabilidad patrimonial: STSJCV 3039/2012, 14 de junio de 2012, y STSJCV 3035/2012, de 6 de mayo

En la Sentencia del TSJCV 3039/2012, de 14 de junio, nos encontramos ante una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración por los daños y perjuicios sufridos a causa de la prohibición de uso de la planta de residuos de Fanzara (Castellón), que ha sido desestimada.

La defensa del reclamante se basa en que en el momento en que el demandante adquiere la condición de “agente urbanizador” con la intención de llevar a cabo la “ejecución del proyecto de construcción y explotación de un depósito controlado de residuos no peligrosos”, la declaración de impacto ambiental (en adelante, DIA) otorgada por el Ayuntamiento permitía dicha instalación. Sin embargo, destaca el Tribunal Superior de

Justicia que la DIA tiene un carácter ambiental y que su concesión no excluye la necesidad de que se obtengan el resto de permisos —en estos casos urbanísticos— necesarios para iniciar una actividad, amén del carácter declarativo de aquella.

El Tribunal Superior de Justicia, al hilo de los fundamentos de la reclamación de los demandantes, recuerda cuáles son los presupuestos necesarios para que se produzca la responsabilidad patrimonial reclamada: en primer lugar, que se trate de hecho imputable a la Administración; en segundo, que la lesión o perjuicio sea antijurídico, efectivo, económicamente evaluable e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; en tercero, que exista una relación de causalidad entre hecho y lesión; y, por último, que no concurra causa de fuerza mayor. A la vista de lo anterior y de la extensa jurisprudencia sobre esta materia, el TSJ considera y apoya la desestimación de la Administración, pues entiende que no se produce ningún perjuicio, dado que la DIA no otorga derecho subjetivo alguno, y, correctamente, en ello se fundamenta la desestimación de la reclamación de responsabilidad, que en este caso supone la desestimación del recurso.

Otro de los pronunciamientos sobre responsabilidad patrimonial es el tratado en la Sentencia del TSJCV 3035/2012, de 6 de mayo. En este caso la responsabilidad patrimonial se reclama por mal funcionamiento de un servicio público ante el daño sufrido por el reclamante en el Paraje Natural de Sierra Calderona, cuya gestión corresponde a la Generalitat Valenciana. Expone la demandante que el daño reclamado se produce por dejadez de la Administración, a consecuencia de la cual se desprendió en el Paraje Natural de Sierra Calderona una piedra de gran tamaño, hecho que le causó graves heridas y secuelas. La cuestión clave es si el desprendimiento descrito se encuadra o no dentro de los supuestos de fuerza mayor, que es, como hemos visto en la Sentencia anterior, una de las condiciones que determinan la responsabilidad patrimonial. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que no hay prueba suficiente de que dicha caída se hubiera producido por una falta de cuidado de la Administración, sino que es más bien un caso fortuito, y puntualiza que no es la Generalitat Valenciana la posible responsable, sino que es el Ayuntamiento de Serra por cuanto el lugar donde se produjo el accidente se ubica en una parcela de titularidad municipal, por lo que no es aplicable el criterio de solidaridad entre administraciones. Por todo ello, desestima el recurso interpuesto y concluye “afirmando que la Administración cumplió con los estándares de seguridad exigibles”.

3. Canon de Control de Vertidos: Sentencia del TSJCV 3581/2012, de 5 de junio

En este supuesto se plantean cuestiones ya abordadas con anterioridad por el TSJCV que se refieren a las contradicciones entre la redacción del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante, TRLAG), y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH) que la desarrolla. En efecto, el Ayuntamiento de Xàtiva reclama ante el TSJCV la anulación de la “Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia de 15.7.2009 que desestima la Reclamación nº 46/08942/2006 interpuesta contra la Resolución de 30.8.2006 por la que se inadmite a trámite el Recurso de Reposición deducido contra la Liquidación número 4164/2006, dictada en fecha 31.3.2006 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, en concepto de Canon de Control de Vertidos ejercicio 2005 e importe de 183.104,60 euros”. Los argumentos de la corporación local son “la inadecuada aplicación del valor del coeficiente K” por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que aplica en su valor máximo 4, ante la realización de un vertido ilegal, según dispone el artículo 292.b) RDPH. No obstante, señala el Ayuntamiento de Xàtiva que la interpretación y la aplicación del citado precepto del RDPH contradicen el artículo 113 TRLAG en relación con el artículo 105.1.b) TRLAG. El TSJ de la CV así lo entiende e interpreta en aplicación del principio de proporcionalidad, de manera que señala que no debe aplicarse siempre el coeficiente máximo 4, sino que este debe aplicarse en función de “la naturaleza, características, grado de contaminación y calidad del medio en que se vierte”; por todo ello, se estima el recurso, en la línea mantenida en jurisprudencia anterior del TSJCV y de la más reciente jurisprudencia del TS, en concreto de la postura reflejada en la Sentencia 1641/2012, de 7 de marzo.

4. Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN): STSJCVCV 4346/2012, de 29 de junio

La importancia de esta sentencia del TSJ de la CV radica en el énfasis del Tribunal en la prevalencia de los planes de ordenación de los recursos naturales —en este caso, respecto al Parque Natural de la Sierra de Espadán— sobre los usos urbanísticos. En efecto, aquellos tienen como finalidad última adecuar la gestión de los recursos

naturales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en esa línea la pretensión del recurrente — el Ayuntamiento de Vilavella— era la anulación del Acuerdo de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente por el que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la resolución dictada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, de fecha 30 de marzo de 2009, por la que se deniega la aprobación definitiva de la Homologación y Plan Parcial del sector Cantalobos del municipio de Vilavella. Recurso que es desestimado sobre la base de los razonamientos antes señalados, en los que se priman las finalidades ambientales de los PORN, así como su naturaleza prevalente y vinculante.

5. Antenas de telefonía móvil

5.1. Licencias ambientales: STJCV 4342/2012, de 29 de junio

En este caso el TSJCV discierne sobre un asunto relativo a las competencias locales. En concreto, el Ayuntamiento de Gandía recurre en apelación la anulación de una sanción impuesta a VODAFONE sobre la base de la atribución de competencias del Ayuntamiento en el ejercicio de la actividad de telefonía móvil, no solo de sus competencias de planeamiento y gestión urbanística, sino también medioambientales — remitiéndose a la jurisprudencia del TS, Sentencia de la Sala 3.^a del Tribunal Supremo de fecha 18 de junio de 2001—, por la que suspende y precinta unas instalaciones de antenas móviles de la empresa VODAFONE, S. A. El TSJCV destaca la errónea referencia que el apelante hace a la doctrina del Tribunal Supremo y adopta una posición, en nuestra opinión, no a favor de la protección ambiental, de manera que considera que no es exigible la licencia ambiental municipal por carecer en este supuesto de competencias para ello y, por lo tanto, desestima el recurso del Ayuntamiento, como también había ya señalado en la STSJCVCV 3628/2012, de 4 de mayo, que comentaremos seguidamente.

5.2. Ordenanzas de antenas: STSJCVCV 3628/2012, de 4 de mayo

El objeto de análisis en este caso es la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas en el término municipal de Benicasim, aprobada por el Pleno Municipal de 5 de febrero de 2009 y publicada en el

BOP de Castellón de la Plana de 9 de mayo de dicho año. En este caso destaca el exhaustivo recorrido que el TSJ realiza de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional sobre un tema tan controvertido, el de las antenas de telefonía móvil, en el que concurren el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Como consecuencia de la aplicación de la Ordenanza, el TSJCV estima parcialmente el recurso interpuesto por FRANCE TELECOM ESPAÑA y anula algunos de los preceptos de la Ordenanza señalada, en concreto el artículo 1, en la medida en que supone la regulación de las radiaciones electromagnéticas en relación con el medio ambiente, el artículo 8.1.D y F y 8.2.E), relativo a zonas de ubicación, el artículo 10, en cuanto a la exigencia de licencia de funcionamiento, el artículo 13, que impone la obligación de aportar la póliza de responsabilidad civil, y el artículo 16, sobre retirada de instalaciones.

6. Homologación del Plan General: STSJCV 2257/2012, de 26 de abril

Nos interesa destacar en este pronunciamiento la causa de anulación de la homologación del Plan General de Xàbia en el área del Portitxol, que se basa justamente en motivos ambientales (FJ 7.º). En efecto, es clave el informe del Servicio de Ordenación Forestal de Planificación y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana sobre la afectación a la masa forestal que supone la urbanización de los terrenos y la construcción de un parque público, informe que, aunque no tiene carácter vinculante, sí es preceptivo, por lo que a juicio del Tribunal y a pesar de que el Ayuntamiento ejerza potestades discrecionales en materia de planificación, este “debe especialmente motivar su decisión y explicitar las razones que le han llevado a adoptar una solución contraria a la que sus órganos técnicos determinan”, pues precisamente el citado informe destaca el valor ambiental de esos terrenos al decir: *“terrenys, que es troben en pendents molt considerables i la seua vegetació actual juga un paper fonamental en la regulació hídrica del barranc de la platja de Portitxol. La destrucció de la vegetació en les capsaleres [sic] del barranc, els necessaris moviments de terra, el notable increment de superfícies impermeables (vials, cases,...), poden suposar un augment important des escorriments en cas de pluges torrencials amb conseqüències molt negatives”*.

Finalmente, otro de los motivos que dan lugar a la estimación del recurso es el relativo a la necesidad de que, ante la existencia de nuevas demandas de agua como consecuencia

de la urbanización de los terrenos afectados, sea preceptivo el informe de la Confederación Hidrográfica, que en este caso tampoco se ha pedido.

Sumari: 1. Zones d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA): STSJCV 4569/2012, de 20 de juliol, 4572/2012, de 23 de juliol, 4573/2012, de 23 de juliol, 4575/2012, 23 de juliol. 2. Responsabilitat patrimonial: STSJCV 3039/2012, de 14 de juny de 2012 y 3035/2012, de 6 de maig. 3. Cànon control d'abocaments: Sentència del TSJCV 3581/2012, de 5 de juny. 4. Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN): STSJCV 4346/2012, de 29 de juny. 5. Antenes de telefonia mòbil. 5.1. Llicències ambientals: STJCV 4342/2012, de 29 de juny. 5.2. Ordenances d'antenes: STSJCV 3628/2012, de 4 de maig. 6. Homologació del Pla General: STSJCV 2257/2012, de 26 d'abril.

1. Zones d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA): STSJCV 4569/2012, de 20 de juliol, 4572/2012, de 23 de juliol, 4573/2012, de 23 de juliol, 4575/2012, 23 de juliol

Començarem assenyalant que vàries han estat les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (des d'ara, TSJCV) dictades arran de l'ampliació d'una Zona d'Especial Protecció per les Aus (ZEPA) a la Comunitat Valenciana, entesa aquesta com una figura de protecció per a les 175 espècies d'aus considerades més amenaçades a Europa, i especialment per a les aus migratòries. En l'àmbit valencià és clau, referent a això, l'Acord de 5 de juny de 2009, del Consell, d'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus de la Comunitat Valenciana, que va suposar un increment substancial de les superfícies total de les ZEPA, a les quals s'afegixen 25 zones ZEPAS més, amb un total, així, de 43 ZEPAS. Aquest Acord que ha estat objecte de múltiples recursos que el Tribunal Superior analitza en aquestes sentències. Ha d'avançar-se que el Regne d'Espanya i, entre unes altres, la Comunitat Valenciana van ser precisament objecte de condemna pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en la Sentència de 28 de juny del 2007 (assumpte C-235/04), davant la insuficiència d'espais protegits en el territori espanyol, en aplicació de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres i que va donar origen a la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sent aquesta una de la jurisprudència citada pel TSJCV en els seus pronunciaments.

Diversos aspectes es plantegen en cadascuna de les demandes interposades, però poden extreure's alguns punts en comú.

En primer lloc, no ha d'oblidar-se i àdhuc més cal recordar que la finalitat de la Directiva d'aus 79/409/CEE, (avui derogada per la cridada Directiva d'Hàbitats 2009/147/CEE) és la protecció preservació, el manteniment o el restabliment d'una diversitat i d'una superfície suficient d'hàbitats són indispensables per a la conservació de totes les espècies d'aus i això comporta l'obligació dels Estats Membres de prendre les mesures necessàries per a la conservació d'aquestes espècies, obligació que donada

la configuració de l'Estat espanyol, com un Estat de les autonomies requereix una important labor de mà de les Comunitats Autònomes amb competències sobre la matèria.

D'altre costat, un dels punts controvertits és el relatiu al valor dels informes IBA (Àrea Important per a les Aus). El TSJ de la Comunitat Valenciana reflexiona sobre la naturalesa dels mateixos, als quals se'ls dedica especial atenció. És necessari considerar que la problemàtica sorgeix pel caràcter no vinculant d'aquests Informes IBA, no obstant això entén el TSJ —a la llum de la jurisprudència europea— que això no és obstacle per a atorgar-los un paper determinant i una utilitat inestimable, doncs els informes IBA identifiquen de les zones ZEPA, i per a això, aquells fan ús de criteris ornitològics i biològics. En aquest sentit, assenyala l'Alt Tribunal Europeu, es considera als informes IBA com base referència a causa del seu valor científic reconegut, per a la classificació dels territoris com ZEPA, excepte aportació de prova científica que desvirtuï la qualificació de l'IBA (entre unes altres, la STJUE de 19 maig de 1998, de 20 març de 2003 i de 25 octubre de 2007).

Un altre dels punts objecte de discussió —en la STSJ Comunitat Valenciana 4574/2012, de 23 de juliol i en la 4575/2012, 23 de juliol— es refereix al procediment de declaració de la ZEPA i en concret al transcendental assumpte de la participació dels interessats, a través del tràmit d'audiència, qüestions abordades també en l'àmbit nacional pel Tribunal Suprem. No obstant això el TS en la interpretació que fa en la seva jurisprudència, adopta posicions al nostre entendre restrictives, que segueix el TSJCV en tant considera que la declaració de ZEPA és una decisió en la qual l'Administració no té cap marge de decisió, raó per la qual, argumenta, és innecessària l'audiència. Entenem que es produïx en aquesta sentència contradiccions, mentre que es considera oportuna la no audiència, al referir-se a la possibilitat de l'interessat de realitzar al·legacions i a la pràctica de la prova. No obstant això, entenem que es tracta de formes de participació no tan perfectes com el tràmit d'audiència, que si bé no és obligatori en tots els supòsits, si hauria d'almenys fomentar-se tant per l'Administració, com pels Tribunals. Els suposat objecte de discussió s'enquadrarien en el cas que una zona declarada parcialment com IBA, s'amplia i inclou en una zona ZEPA, realitat que segons el parer del TSJ requereix únicament de motivació, però gens diu sobre la participació.

Amb tot ha de ressaltar-se les conclusions a les quals arriba el Tribunal i en les quals clarament s'opta per una àmplia preservació del medi ambient, com es posa de manifest al prevaler els aspectes ambientals per sobre d'altres interessos, com els econòmics. En aquest sentit les sentències examinades diuen “Ja hem vist, segons les sentències del TJCE que els criteris per a la classificació de ZEPAS, no són sinó els ornitològics, sense que sigui possible en la determinació de la seva delimitació la concurrència d'altres exigències, com per exemple les de caràcter econòmic”. D'altre costat, s'atorga als informes IBA si bé no un caràcter vinculant, sí una presumpció de veracitat *iuris tantum*, que suposa un desplaçament de la càrrega de la prova d'aquells que s'oposin a aquesta qualificació. Sobre la base d'aquests raonaments el TSJCV rebutja la majoria de recursos presentats.

En un altre dels pronunciaments no obstant això —STSJCV 4573/2012— el Tribunal estima el recurs, ja que com al·lega la part recurrent no s'han considerat com ZEPA les superfícies integrades en l'IBA. En aquest sentit diu el TSJCV que “l'administració s'ha separat del criteri de delimitació de les ANAVA i ho ha fet, sense que en el Decret que es recorre, hagi determinat les raons d'aquesta disconformitat, de manera que l'acte en aquest sentit no està motivat i procedirà decretar la seva anul·lació”.

2. Responsabilitat patrimonial: STSJ Comunitat Valenciana 3039/2012, de 14 de juny de 2012 y 3035/2012, de 6 de maig

En la Sentència del TSJCV 3039/2012, de 14 de juny, ens trobem davant un supòsit en el qual el demandant ha interposat reclamació de responsabilitat patrimonial davant l'Administració pels danys i perjudicis soferts a causa de la prohibició d'ús de la Planta de Residus a Fanzara (Castelló) i aquella l'ha desestimat.

La defensa del reclamant es basa que en el moment que el demandant adquireix la condició d'agent “urbanitzador“ amb la intenció de portar a terme l'execució “del projecte de construcció i explotació d'un dipòsit controlat de residus no peril·losos”, la Declaració d'Impacte Ambiental (des d'ara, DIA) atorgada per l'Ajuntament permetia aquesta instal·lació. No obstant això, destaca el Tribunal Superior de Justícia com la DIA té un caràcter ambiental i que la seva concessió, no exclou la necessitat que s'obtinguin la resta de permisos —en aquests casos urbanístics— necessaris per a iniciar una activitat, estimin del caràcter declaratiu d'aquella.

El Tribunal Superior de Justícia al fil dels fonaments de la reclamació dels demandants recorda quins són els pressupostos necessaris perquè es produeixi la responsabilitat patrimonial reclamada: en primer lloc, que es tracti de fet imputable a l'Administració, en segon, que la lesió o perjudici sigui antijurídic, efectiu, econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grup de persones, tres, que existeixi una relació de causalitat entre fet i lesió, i finalment, que no concorri causa de força major. A la vista de l'anterior i de l'extensa jurisprudència sobre aquesta matèria, el TSJ considera i dóna suport la desestimació de l'Administració doncs entén que no es produïx cap perjudici, atès que la DIA no atorga dret subjectiu algun, i, correctament, en això es fonamenta la desestimació de la reclamació de responsabilitat i que en aquest cas suposa la desestimació del recurs.

Un altre dels pronunciaments sobre responsabilitat patrimonial és el tractat en la Sentència del TSJCV 3035/2012, de 6 de maig. En aquest cas la responsabilitat patrimonial es reclama per mal funcionament d'un servei públic, davant el dany sofert pel reclamant en el Paratge Natural de Serra Calderona, la gestió del qual correspon al Generalitat Valenciana. Exposa la demandant que el dany reclamat es produïx, per deixadesa de l'Administració, a conseqüència del despreniment en el Paratge Natural de Serra Calderona d'una pedra de gran grandària, fet que li va causar greus ferides i seqüeles. La qüestió clau és si el despreniment descrit s'enquadra o no dintre dels supòsits de força major, que és com hem vist en la sentència anterior una de les condicions que determina la responsabilitat patrimonial. Referent a això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana considera que no hi ha prova suficient que aquesta caiguda s'hagués produït per una falta de cura de l'Administració, sinó que és més aviat un cas fortuït, i puntualitza no és la Generalitat Valenciana la possible responsable, sinó que és l'Ajuntament de Serra en tant el lloc on es va produir l'accident se situa en una parcel·la de titularitat municipal, pel que no és aplicable el criteri de solidaritat entre Administracions. Per tot això es desestima el recurs interposat i conclou que “conclou afirmant que l'Administració va complir amb els estàndards de seguretat exigibles”.

3. Cànon control d'abocaments: Sentència del TSJCV 3581/2012, de 5 de juny

En aquest supòsit es plantegen qüestions ja abordades amb anterioritat pel TSJCV i que es refereixen a la contradicció entre la redacció del Text Refós de la Llei d'Aigües

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol (des d'ara, TRLAG) i el Reglament del Domini Públic Hidràulic (des d'ara, RDPH) que la desenvolupa. En efecte l'Ajuntament de Xàtiva reclama davant el TSJCV l'anul·lació de la "Resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de València de 15.7.2009 que desestima la Reclamació nº 46/08942/2006 interposada contra la Resolució de 30.8.2006 per la qual s'inadmet a tràmit el Recurs de Reposició deduït contra la Liquidació nombre 4164/2006, dictada en data 31.3.2006 per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de Cànon de Control d'Abocaments exercici 2005 i import de 183.104,60 euros". Els arguments de la Corporació Local són "la inadequada aplicació del valor del coeficient K" per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que aplica en el seu valor màxim 4, davant la realització d'un abocament il·legal, segons disposa l'art.292.b) RDPH. No obstant això, assenyala l'Ajuntament de Xàtiva que la interpretació i aplicació del citat precepte del RDPH, és contradictòria amb l'art.113 TRLAG en relació amb l'art.105.1.b) TRLAG. El TSJ de la CV en aplicació del principi de proporcionalitat així ho entén i interpreta, de manera que assenyala que no ha d'aplicar-se sempre, en tot cas, el coeficient màxim 4, sinó que el coeficient ha d'aplicar-se en funció de la "naturalesa, característiques, grau de contaminació i qualitat del mitjà que s'aboca", per tot això s'estima el recurs, en la línia mantinguda en jurisprudència anterior del TSJCV i de la més recent jurisprudència del TS, en concret de la postura reflectida en la Sentència 1641/2012, de 7 de març.

4. Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN): STSJCV 4346/2012, de 29 de juny

La importància d'aquesta Sentència del TSJ de la CV radica en l'èmfasi que realitza el Tribunal en la prevalença dels Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals, en aquest cas es refereix al Parc Natural de la Serra de Espadán, sobre els usos urbanístics. En efecte aquells té com finalitat última adequar la gestió dels recursos naturals, d'acord amb el disposat en la Llei 42/2007, de de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i en aquesta línia la pretensió del recurrent —l'Ajuntament de Vilavella— era l'anul·lació de l'Acord de la Secretaria Autònoma de Territori i Medi ambient, per la qual es desestima el recurs ordinari interposat contra la resolució dictada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, de data 30 de març de 2009, per la qual es denega l'aprovació definitiva de l'Homologació i Pla Parcial del sector Cantalobos

del municipi de Vilavella. Recurs que és desestimat sobre la base dels raonaments abans assenyalats, en els quals es prevalen les finalitats ambientals dels PORN, així com la seva naturalesa prevalent i vinculant.

5. Antenes de telefonia mòbil

5.1. Llicències ambientals: STJCV 4342/2012, de 29 de juny

En aquest cas el TSJCV destria sobre un assumpte relatiu a les competències locals. En concret l'Ajuntament de Gandía recorre en apel·lació, l'anul·lació d'una sanció imposada a VODAFONE, sobre la base de l'atribució de competències de l'Ajuntament en l'exercici de l'activitat de telefonia mòbil, no només sobre la base de les seves competències planejament i gestió urbanística, sinó també mediambientals —remetent-se a la jurisprudència del TS, Sentència de la Sala 3^a del Tribunal Suprem de data 18 de juny de 2.001— pel que suspèn i precinta unes instal·lacions d'antenes mòbils de l'empresa VODAFONE S. A. El TSJCV destaca l'errònia referència que l'apel·lant fa a la doctrina del Tribunal Suprem, i adopta una posició en aquest cas entenem que no a favor de la protecció ambiental, de manera que considera que no és exigible la llicència ambiental municipal, per acréixer en aquest supòsit de competències per a això, i que per tant es desestima el recurs de l'Ajuntament, com també havia ja assenyalat en la STSVCV 3628/2012, de 4 de maig, que comentarem seguidament.

5.2. Ordenances d'antenes: STSVCV 3628/2012, de 4 de maig

L'objecte d'anàlisi en aquest cas és l'Ordenança Municipal Reguladora de la Instal·lació i Funcionament d'Infraestructures Radioelèctriques en el terme municipal de Benicàssim, aprovada pel Ple Municipal de 5 de febrer de 2009 i publicada en el BOP de Castelló de la Plana 9 de maig d'aquest any. En aquest cas destaca l'exhaustiu recorregut que el TSJ realitza de la jurisprudència tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional sobre un tema tan controvertit, el de les antenes de telefonia mòbil, en el qual concorren l'Estat, les Comunitats Autònomes i els Ens Locals. Conseqüència de l'aplicació de la mateixa, el TSJCV estima parcialment el recurs interposat per FRANCE TELECOM ESPANYA, anul·lant alguns dels preceptes de l'Ordenança assenyalada, en concret els arts. 1 en la mesura que suposa la regulació de les radiacions electromagnètiques en relació amb el medi ambient, l'art. 8.1.D i F i

8.2.I) sobre relatiu a zones d'ubicació, l'art. 10, quant a l'exigència de llicència de funcionament, l'art. 13 que imposa l'obligació d'aportar la pòlissa de responsabilitat civil i l'art. 16, sobre retirada d'instal·lacions.

6. Homologació del Pla General: STSJCV 2257/2012, de 26 d'abril

Ens interessa destacar en aquest pronunciament la causa d'anul·lació de l'homologació del Pla General de Xàbia en l'àrea del Portichol, que es basa justament en motius ambientals (FJ 7). En efecte, és clau l'informe del Servei d'Ordenació Forestal de Planificació i Ordenació del Territori de la Generalitat Valenciana sobre l'afecció de la massa forestal que suposa la urbanització dels terrenys i la construcció d'un parc públic, informe que encara que no té caràcter vinculant, sí és preceptiu, pel que segons el parer del Tribunal i a pesar que l'Ajuntament exerceixi potestats discrecionals en matèria de planificació, aquest "ha d'especialment motivar la seua decisió i explicitar les raons que li han dut a adoptar una solució contrària a la qual els seus òrgans tècnics determinen", doncs precisament el citat Informe destaca el valor ambiental d'aquests terrenys en dir: "terrenys, que es troben en pendents molt considerables i la seua vegetació actual juga un paper fonamental en la regulació hídrica del barranc de la platja de Portitxol. La destrucció de la vegetació en les capsaleres [sic] del barranc, els necessaris moviments de terra, el notable increment de superfícies impermeables (vials, cases,...), poden suposar un augment important des escorriments en cas de pluges torrencials amb conseqüències molt negatives".

Finalment altre dels motius que donen lloc a l'estimació del recurs és el relatiu a la necessitat que davant l'existència de noves demandes d'aigua conseqüència de la urbanització dels terrenys afectats, sigui preceptiu l'Informe de la Confederació Hidrogràfica, que en aquest cas tampoc s'ha demanat.